

La Prensa 12 02 2011

Echan a 2 ejecutivos de Emapa y a uno de Impuestos por el azúcar

La venta irregular y privilegiada de azúcar para los masistas hizo rodar tres cabezas. El gerente de Comercialización de Emapa, Gonzalo Sejas, y el asesor jurídico de esa empresa, Jesús Balderrama, fueron destituidos. También se anunció el cese en sus funciones del gerente regional de Grandes Contribuyentes de Impuestos Nacionales, William Hurtado.

De acuerdo con las autoridades gubernamentales, los tres son responsables de la venta privilegiada de azúcar para funcionarios de Impuestos.

El viernes, vecinos molestos denunciaron a los medios que los trabajadores de esa institución recaudadora habían recibido azúcar y se la estaban repartiendo. La denuncia terminó en la casa donde vive el concejal masista Jorge Silva, en la que se descubrió una centena de quintales del producto almacenados para su distribución.

Uno de los habitantes de la casa salió rápidamente para explicar que el azúcar no era de propiedad de Jorge Silva, sino de los empleados de Impuestos, que la habían comprado de Emapa.

La venta se produjo pese a una decisión del Gobierno de que la empresa de alimentos no vendiera ninguno de sus productos ni a instituciones privadas ni públicas para evitar el tráfico de influencias y los privilegios basados en la militancia masista.

Ayer, el gerente general de Emapa, Álvaro Rodríguez, declaró que esa venta fue irregular y que se debe investigar el caso para identificar la responsabilidad de cada uno de los destituidos.

“En función a la gravedad del caso, decidimos destituir a los (dos) funcionarios de Emapa porque son responsables de no acatar las órdenes. Lo mismo sucede en el Ministerio de Economía y Finanzas en contra del empleado que había solicitado azúcar; además, el de Impuestos Nacionales, que dejará de trabajar”, sostuvo.

El Gerente de Emapa especificó que se entregó a los funcionarios de Impuestos 72 quintales de harina, 200 de azúcar y 200 de arroz. La compra se hizo en diciembre del 2010. La noche del viernes, los vecinos de la calle Luis Jemio, de Miraflores, denunciaron que llegaron dos camiones al lugar en horas de la madrugada y de la tarde con esos productos, los cuales fueron descargados en el inmueble.

El copropietario de la vivienda, Ismael Huayta, confirmó la información de la llegada de los quintales de azúcar, harina y arroz al lugar, que los funcionarios del SIN compraron de Emapa en diciembre, y que en el lugar vive el concejal masista Jorge Silva. Sin embargo, se presume que esa casa no es la única donde hay azúcar almacenada.

“Estamos hablando de una entrega que estaba prohibida y eso es lo que ha ocasionado este problema. Nosotros hemos decidido corregir eso sancionando a la gente que no hizo caso y que no obedeció una instrucción”, concluyó Álvaro Rodríguez, de la estatal Emapa.

Las largas filas por azúcar en los mercados disminuyeron ayer

Las filas por el azúcar en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) se reducen poco a poco. Este sábado, La Prensa observó que en las sucursales de la distribuidora estatal, tanto en la ciudad de La Paz como en la de El Alto, la demanda se redujo a filas de entre 20 y 30 personas, quienes eran rápidamente atendidas.

En la sucursal de la calle Gallardo, en la zona Gran Poder, donde hasta hace unos días no sólo hubo gran demanda, sino conflictos con los comerciantes de abarrotes, ayer hubo una venta tranquila y sólo se contó entre 25 y 30 personas esperando su turno para obtener el endulzante. Los clientes debían, primero, pagar y registrar su cédula de identidad para luego recoger el azúcar. Sin embargo, no faltó quien se animó a expresar su molestia por el plazo establecido para una nueva compra, que es de 30 días.

Juan Luis Pozo mencionó que le parece muy largo el plazo para una nueva compra, “en mi familia somos más de diez personas y una arroba no alcanza, debería de ser por lo menos de 15 días, como era antes”, dijo con molestia.

Otro punto visitado fue en el mercado Rodríguez, en la zona de San Pedro, donde se vio similar panorama. Pamela Otero, responsable de ventas de la Emapa, afirmó que la demanda de la gente se redujo. “En días pasados la fila era larga y se atendía a más de mil personas al día, ahora esta cantidad ha bajado”.

Una situación parecida se observó en El Alto, los puntos de venta de las avenidas Bolivia, 16 de Julio y Franco Valle fueron visitadas por pocos compradores.

Incluso, la mañana de ayer, se vio que un camión de Insumos Bolivia (IB) vendía azúcar en la plaza España y atendió en poco tiempo a sus compradores, luego se quedó esperando clientela.

En la plaza Camacho también IB vendió azúcar a cinco kilos por persona.

La Emapa vende arrobas de azúcar a 86 bolivianos y de arroz a 43, y el quintal de harina a 151 bolivianos en todos sus puntos de venta.

Vence el plazo de los diez días

El jueves 3 de febrero, la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, prometió que en de 10 días se acabarán las filas que hacen cientos de personas por adquirir azúcar en las tiendas de la Emapa y en los puntos móviles que habilitó Insumos Bolivia (IB). Mañana fenece ese plazo.

“Yo diría que el abastecimiento que estamos logrando, a partir del próximo lunes, en todas las cadenas de supermercados y en todas las ciudades de Bolivia, en un máximo de 10 días va a ser totalmente satisfecho y no va haber ninguna cola”, dijo entonces.

Los Tiempos / Cochabamba

Productores: Hay que reactivar la rueda de la producción del maíz

Tras la confirmación de una baja del 60 por ciento en la producción del maíz en Bolivia, los empresarios productores de este grano instan al Gobierno a “ponerle el pecho” y juntar esfuerzos antes del mes de marzo para lograr una recuperación con el debido respaldo gubernamental.

“Hay que volver a activar la rueda de la producción, que implica financiamiento o facilidades o compromisos de venta futura y utilización de todos los mecanismos existentes para la provisión de semillas”, explicó el presidente de los Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), Vicente Gutiérrez.

Según datos de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo), actualmente la demanda nacional de maíz está en el rango de las 760 mil toneladas, mientras que la producción nacional este año está estimada en 400 mil toneladas, lo cual obliga la importación del producto transgénico que se cultiva en países vecinos.

Para el presidente de la Anapo, Demetrio Pérez, si la solución que los productores demandan del Gobierno se posterga más allá de febrero, “estaríamos postergando el incremento del área productiva y la solución de la crisis alimentaria para el siguiente año”.

La voluntad política, según Pérez, es fundamental para solucionar la caída de la producción de maíz, que no sólo afectó el consumo de la población, sino también la industria avícola, que no tiene con qué alimentar a los pollos, ocasionando la descapitalización de muchas empresas, que están al borde de la quiebra.

“Lo que le estoy pidiendo al Gobierno es que tenga la voluntad política en todos los ámbitos no sólo a nivel del Presidente y Vicepresidente, sino en los ministros y todos los mandos medios que tienen que ver con la problemática en los que no se nota esa voluntad”, destacó Pérez.

Una de las primeras acciones, y que en criterio de los productores no necesita de mucho tiempo, es que el Gobierno haga respetar el derecho a la propiedad privada para luego dar paso a la

legalización de los desmontes. Las restricciones de los mismos y la burocracia existente para legalizar documentación han hecho retroceder a los productores con la consecuente disminución de las áreas cultivables.

“Parece que no se refleja la preocupación del presidente ni del vicepresidente (del Estado) hacia los mandos que están encargados de esa responsabilidad”, agregó y pidió una instrucción precisa para resolver los problemas y no dilatarlos ni tener posiciones ideológicas.

Baja producción de maíz

Además de la restricciones que el Gobierno impuso a los productores de maíz y los factores climatológicos, el presidente de Promasor atribuye la baja producción de maíz al encarecimiento de la semilla, a la falta de financiamiento y facilidades en el acceso a los mercados y, sobre todo, a la falta de certidumbre para las inversiones, es decir la falta de garantías a los agroempresarios y otros sectores para trabajar con seguridad.

“Entendemos que el Gobierno distribuyó semillas en algunos municipios, pero no es algo de lo que tengamos conocimiento pleno, especialmente sobre volúmenes suficientes”, sostuvo.

De 150 mil hectáreas proyectadas, los productores de maíz llegaron a cultivar este año 93 mil hectáreas, lo que en criterio de Gutiérrez es un problema que se debe analizar con el Gobierno y todas las instancias involucradas.

La posición de los empresarios productores fue criticada por el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, que los calificó de “traidores a la lucha cívica de Santa Cruz”.

Soluciones

Avasallamientos. Los productores piden al Gobierno que se haga respetar el derecho a la propiedad privada y evite el avasallamiento de tierras.

Desmontes. Los productores piden que se normen los desmontes, que son fundamentales para ampliar la producción. Es necesario viabilizar la legalización de tierras desmontadas.

Propuesta. Los productores preparan una propuesta para ver la modalidad bajo la que se podrían legalizar esas tierras.

Análisis. Los productores de Promasor piden al Gobierno que junto a ellos realice un análisis profundo sobre la problemática, que ya no es de un sector, sino de todo un país.